



Asamblea General

Distr. general
22 de junio de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 62º período de sesiones,
16 a 25 de noviembre de 2011**

Nº 66/2011 (Bangladesh)

Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de septiembre de 2011

**Relativa a: Motiur Rahman Nizami, Abdul Quader Molla, Mohammad
Kamaruzzaman, Ali Hasan Mohammed Mujahid, Allama Delewar Hossain
Sayedee y Salhuddin Quader Chowdhury**

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.
2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El Sr. Motiur Rahman Nizami, nacional de Bangladesh con residencia habitual en Dhaka, es el líder del partido Jamaat-e-Islami, el tercero más numeroso de Bangladesh. Fue Ministro de Agricultura entre 2001 y 2003 y de Industria entre 2003 y 2007.

4. Según se informa, el Sr. Nizami fue detenido el 29 de junio de 2010 en el Jatiya Press Club de Dhaka por agentes de la Rama de Investigación de la Policía Metropolitana de Dhaka, al parecer por una acusación de ofensa a los sentimientos religiosos de los musulmanes (caso registrado N° CR 1012/12), delito tipificado en los artículos 295(A) y 298/109 del Código Penal. El 30 de junio de 2010 el Sr. Nizami fue puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, volvió a ser detenido de inmediato en relación con otros cinco casos (casos registrados en la comisaría de Paltan N° 20(2)10, N° 37(2)10 y N° 25(6)10, caso N° 31(2)10 registrado en la comisaría de Uttara y caso N° 55(6)10 registrado en la comisaría de Ramma. Posteriormente al Sr. Nizami se le formularon cargos por tres casos más (caso N° 57(4)10 registrado en la comisaría de Kadamtali, caso N° 34(12)07 registrado en la comisaría de Keraniganj y caso N° 60(1)08 registrado en la comisaría de Pallabi.

5. El 30 de junio de 2010, el Tribunal Metropolitano Principal de delitos menores decretó la prisión provisional del Sr. Nizami durante 16 días. El 26 de julio de 2010 se ordenó su prisión provisional por 3 días más. Al parecer, en todo ese período el Sr. Nizami permaneció en las Oficinas de la Rama de Investigación sin acceso a abogado ni a sus familiares.

6. El 22 de julio de 2010, el Fiscal Principal del Tribunal de Delitos Internacionales establecido en virtud de la legislación de Bangladesh solicitó al Tribunal que ordenara la detención del Sr. Nizami con arreglo al artículo 9, párrafo 1 del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales, por actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales (tribunales) de 1973, enmendada en 2009, bajo la sospecha de haber cometido crímenes de guerra durante la guerra de liberación de Bangladesh de 1971. El 2 de agosto de 2010 el Tribunal ordenó que el Sr. Nizami siguiera bajo custodia policial en virtud del artículo 11, párrafo 5, de la Ley de delitos internacionales (tribunales), en el que se establece que "cualquier miembro de un tribunal está facultado para dictar una orden de detención contra toda persona acusada de uno de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley, decretar su prisión provisional y autorizar la prórroga de su prisión provisional". El Sr. Nizami aun permanece detenido en la Prisión Central de Dhaka sin que se le hayan formulado cargos por delitos previstos en el artículo 3 de la Ley.

7. El 29 de noviembre de 2010, se otorgó libertad bajo fianza al Sr. Nizami en relación con dos de las causas penales abiertas en su contra y el 30 de noviembre de 2010, con otras cuatro causas. Se encuentra pendiente de examen por el Tribunal Superior una solicitud de libertad bajo fianza presentada por el Sr. Nizami en relación con otra causa. Con respecto a

los dos causas restantes (casos N° 34(12)07 de la comisaría de Keranigang y N° 60(1)08 de la comisaría de Pallabi) sometidas a la acción del Fiscal jefe del Tribunal de Delitos Internacionales, no se ha solicitado libertad bajo fianza, pues presuntamente se ha impedido que el abogado defensor del Sr. Nizami tenga acceso a las pruebas de esas causas.

8. El Sr. Abdul Quader Molla, nacional de Bangladesh con residencia habitual en Dhaka, es el Subsecretario General del partido Jamaat-e-Islami.

9. El 13 de julio de 2010, agentes de la Rama de Investigación de la Policía Metropolitana de Dhaka detuvieron al Sr. Molla en el recinto del Tribunal Superior de esa ciudad por la presunta violación de lo establecido en los artículos 148, 448, 302, 34, 101, 326, 307 y 436 del Código Penal, en un caso relacionado con la matanza de combatientes por la libertad y tres incendios intencionales que tuvieron lugar en Pallabi hace 38 años. El 14 de julio de 2010 el Tribunal Metropolitano de Primera Instancia impuso al Sr. Molla una medida de cinco días de prisión provisional en el Departamento Central de Investigaciones. El 22 de julio de 2010 la policía añadió otras cuatro causas a los motivos de la detención del Sr. Molla. Se le mantuvo en prisión provisional durante 11 días.

10. El 22 de julio de 2010, el Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales solicitó a ese Tribunal que dictara una orden de detención contra el Sr. Molla con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales, por actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales. El 2 de agosto de 2010 el Tribunal de Delitos Internacionales ordenó la detención del Sr. Molla. La fuente afirma que el Tribunal violó el artículo 11, párrafo 5, de la Ley. El Sr. Molla no ha sido acusado de ningún delito concreto tipificado en el artículo 3 de la Ley. El 30 de noviembre de 2010 se le concedió la libertad bajo fianza en relación con cuatro de las causas en su contra. No se solicitó fianza en dos casos presentados ante el Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales, pues al parecer se impidió que el abogado defensor del Sr. Molla tuviera acceso a las pruebas (caso N° 34(12)07 de la comisaría de Keranigang y caso N° 60(1)08 de la comisaría de Pallabi).

11. El Sr. Mohammad Kamaruzzaman, nacional de Bangladesh con residencia habitual en Dhaka, es Subsecretario General del partido Jamaat-e-Islami.

12. Se le detuvo inicialmente el 13 de julio de 2010 por la presunta comisión de delitos previstos en los artículos 148, 448, 302, 34, 101, 326, 307 y 436 del Código Penal de Bangladesh. El 14 de julio de 2010 se le aplicó una medida de prisión provisional de cinco días en el Departamento de Investigaciones Criminales, en virtud de una orden del Tribunal Metropolitano de Primera Instancia.

13. El 22 de julio de 2010, la policía añadió cargos contra el Sr. Kamaruzzaman en relación con otras cuatro causas y fue puesto en prisión provisional durante 11 días. El mismo día, el Fiscal jefe del Tribunal de Delitos Internacionales solicitó a ese Tribunal que ordenara la detención del Sr. Kamaruzzaman en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales por la comisión de actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales (tribunales). El 2 de agosto de 2010 el Tribunal ordenó que el Sr. Kamaruzzaman permaneciera detenido con arreglo al artículo 11, párrafo 5, de la Ley. El 30 de noviembre de 2010 se le otorgó libertad bajo fianza en cuatro causas. El Sr. Kamaruzzaman ha permanecido detenido por cargos relacionados con otras dos causas (caso N° 34(12)07 de la comisaría de Keranigang y caso N° 60(1)08 de la comisaría de Pallabi) sometidas a la acción del Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales, pues al parecer, se ha impedido el acceso del abogado defensor del Sr. Kamaruzzaman a las pruebas de esas causas.

14. El Sr. Ali Hasan Mohammed Mujahid, nacional de Bangladesh residente en Dhaka, es el Secretario General del partido Jamaat-e-Islami y exministro de Bienestar Social (2001-2006).

15. El 29 de junio de 2010 el Sr. Mujahid fue detenido en el distrito de Savar por agentes de la Oficina de la Rama de Investigación de la Policía Metropolitana de Dhaka, bajo la acusación de ofensa a los sentimientos religiosos, conducta tipificada como delito en los artículos 295(A), 298 y 109 del Código Penal de Bangladesh. El 30 de junio de 2010 fue puesto en libertad bajo fianza e inmediatamente volvió a ser detenido por otras cinco causas. Posteriormente al Sr. Mujahid se le formularon cargos en relación con otros cuatro casos. El 29 de junio de 2010 se le recluyó en la Prisión Central de Dhaka. El 20 de enero de 2011 lo transfirieron a la Prisión del distrito de Narayanganj, donde se le mantiene todavía. El 30 de junio de 2010 el Tribunal Metropolitano de Primera Instancia impuso al Sr. Mujahid una medida de 16 días de prisión provisional en relación con cinco causas penales pendientes en su contra.

16. El 15 de julio de 2010 se decretó su prisión provisional durante tres días en relación con una de las causas en su contra. El 26 de julio de 2010 se le impuso nuevamente prisión provisional por otra causa. En ese período permaneció en las Oficinas de la Rama de Investigación y al parecer se le negó el acceso a un abogado y a sus familiares.

17. El 22 de julio de 2010 el Fiscal jefe del Tribunal de Delitos Internacionales solicitó a ese Tribunal que ordenara la detención del Sr. Mujahid con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales, por actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales (tribunales). El 2 de agosto de 2010 dicho Tribunal dictó una orden de detención contra el Sr. Mujahid, presuntamente en contravención del artículo 11, párrafo 5, de la Ley. Según la fuente, hasta el momento no se ha imputado al Sr. Mujahid ninguno de los delitos tipificados en el artículo 3 de la Ley.

18. Al igual que los demás detenidos, el 29 de noviembre de 2010 al Sr. Mujahid se le concedió libertad bajo fianza en relación con dos causas y el 30 de noviembre de 2010, en relación con otras cinco causas. Está pendiente ante el Tribunal Superior su solicitud de libertad bajo fianza en relación con otra causa. El Sr. Mujahid siguió detenido en relación con dos causas (caso N° 34(12)07 de la comisaría de Keranigang y caso N° 60(1)08 de la comisaría de Pallabi) que fueron sometidas a la acción del Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales que, al parecer, impide el acceso del abogado defensor del Sr. Mujahid a las pruebas.

19. El Sr. Allama Delewar Hossain Sayedee, nacional de Bangladesh con residencia en Dhaka, es vicepresidente del partido Jamaat-e-Islami.

20. El 29 de junio de 2010 agentes de la Rama de Investigación de la Policía Metropolitana de Dhaka detuvieron en su domicilio al Sr. Sayedee por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos de los musulmanes, previsto en los artículos 295(A), 298 y 109 del Código Penal de Bangladesh. Entre el 29 de junio de 2010 y el 25 de marzo de 2011, el Sr. Sayedee fue transferido en múltiples ocasiones a diferentes centros de detención. Actualmente sigue detenido en la Prisión Central de Dhaka. El 30 de junio de 2010 se le concedió libertad bajo fianza en relación con una de las causas en su contra. Volvió a ser detenido por acusaciones relacionadas con otras cinco causas. Más tarde también fue imputado en relación con otras dos causas.

21. El 30 de junio de 2010, el Tribunal Metropolitano de Primera Instancia decretó la prisión provisional del Sr. Sayedee por un plazo de 16 días en conexión con los cinco casos. Este permaneció detenido 12 días en la comisaría de Ramna y cuatro días en las Oficinas de la Rama de Investigación. Al parecer, durante la detención provisional se le negó el acceso a sus abogados y familiares.

22. El 19 de julio de 2010, el Sr. Sayedee fue sometido a prisión provisional por otros 12 días, durante los que permaneció en el Departamento de Investigaciones Criminales y las Oficinas de la Rama de Investigación.

23. El 22 de julio de 2010, el Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales solicitó a ese Tribunal que ordenara la detención del Sr. Sayedee en virtud del artículo 9, párrafo 1 del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales, por actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales (tribunales). El 2 de agosto de 2010, dicho Tribunal ordenó la detención del Sr. Sayedee. Según la fuente, esa orden contraviene lo establecido en el artículo 11, párrafo 5, de la Ley de delitos internacionales (tribunales), teniendo presente que hasta la fecha el Sr. Sayedee no ha sido acusado de ninguno de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley.
24. El 29 de noviembre de 2010 se otorgó libertad bajo fianza al Sr. Sayedee en relación con tres causas, y el 30 de noviembre de 2010, con otras cuatro causas. El Tribunal Superior aun no se ha pronunciado sobre su solicitud de libertad bajo fianza en relación con otra causa.
25. El Sr. Salhuddin Quader Chowdhury, nacional de Bangladesh con residencia en Dhaka, es miembro del Comité Permanente del Partido Nacional de Bangladesh.
26. El 16 de diciembre de 2010, un equipo compuesto por agentes de las Fuerzas de Acción Rápida, la Dirección General de Fuerzas de Inteligencia y la Oficina de Investigaciones de la policía detuvo al Sr. Chowdhury en su residencia de Joypurhat Sadar, en la zona de Banani, Dhaka. El Sr. Chowdhury fue detenido en relación con un incendio provocado el 26 de junio de 2010.
27. El 15 de diciembre de 2010, el Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales solicitó al Tribunal que dictara una orden de detención contra el Sr. Chowdhury, en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Reglamento y el Procedimiento del Tribunal de Delitos Internacionales, por la comisión de actos tipificados en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de delitos internacionales (tribunales), en particular bajo sospecha de crímenes de guerra durante la guerra de liberación de Bangladesh de 1971.
28. El 19 de diciembre de 2010, el Tribunal de Delitos Internacionales emitió una orden de comparecencia y otra de detención contra el Sr. Chowdhury con arreglo al artículo 11, párrafo 5, de la Ley. El 19 de abril de 2011, al Sr. Chowdhury se le denegó una solicitud de libertad bajo fianza, aunque él mismo había propuesto que la libertad fuera condicional a fin de reducir al mínimo el riesgo de evasión, interferencias en la investigación, o comisión de otros delitos. Según la fuente, aún no se ha informado oficialmente al Sr. Chowdhury de los motivos de su detención.
29. El 21 de abril de 2011, las seis personas a quienes se refiere la comunicación solicitaron libertad bajo fianza, sobre la base de que se encontraban detenidas arbitrariamente y sin que se les hubieran formulado cargos durante la investigación preliminar. Los propios detenidos propusieron que, a fin de impedir el riesgo de evasión, interferencia en la investigación, influencia sobre los testigos de la acusación o reincidencia en la comisión de delitos, se les aplicaran condiciones, como entregar sus pasaportes a las autoridades competentes, residir en una dirección determinada, comparecer periódicamente ante las autoridades locales y abstenerse de viajar sin permiso previo. Ofrecieron también como condición de la libertad provisional una garantía consistente en una suma acordada. La libertad bajo fianza fue denegada con el argumento de que era un privilegio al que los solicitantes no tenían derecho en el caso dado. Al parecer, el 10 de febrero de 2011 el Ministro de Legislación, Justicia y Asuntos Parlamentarios declaró en público que en los casos en cuestión no había lugar a la fianza. La fuente considera que la denegación fue injustificada.
30. La fuente afirma que la privación de libertad de los Sres. Nizami, Molla, Kamaruzzaman, Mujahid, Sayedee y Chowdhury contraviene el artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después de la orden dictada por el Tribunal de Delitos Internacionales el 2 de agosto de 2010, aun no se ha formalizado

ningún cargo concreto que justifique su detención, que ya se extiende por más de un año. La fuente señala también que las alegaciones del Ministerio Fiscal contra las seis personas son imprecisas y no fueron comunicadas a estos prontamente después de su detención lo que, al parecer, viola lo establecido en los artículos 9, párrafo 2, y 14, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La fuente pone de relieve que la práctica de interrogar a imputados sin que estos sepan de qué se les acusa es contraria a los principios generales del derecho y al artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

31. De acuerdo con la información recibida, el Tribunal de Delitos Internacionales declaró que como no se había completado la investigación contra las seis personas mencionadas, su abogado defensor no tenía derecho a recibir ninguna información relativa a la investigación (*Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales c. Motiur Rahman Nizami y otros [ICT-BD Misc. Caso N° 01/2010]*). Además, los días 5 y 19 de abril de 2011 el Tribunal ordenó que el abogado defensor no asistiera a los interrogatorios, lo que, al parecer, contraviene el artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se informa de que tras los interrogatorios de los Sres. Nizami, Mujahid, Sayedee y Chowdhury, el Investigador jefe entregó presuntamente a los medios de comunicación declaraciones hechas por dichos imputados durante ese procedimiento según las cuales confesaron haber cometido el delito de genocidio en 1971.

32. La fuente señala a la atención la alegación, de que el 20 de abril de 2011, en la causa *Fiscal Jefe del Tribunal de Delitos Internacionales c. Allama Delwar Hossain Sayedee [ICT-BD Misc. Caso N° 03 de 2010]*, el Ministerio Fiscal presentó ante el Tribunal dos expedientes de las diligencias del caso en que se detallaba la investigación contra el Sr. Sayedee, pero su contenido no se ha revelado al abogado defensor.

33. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la fuente afirma que la prisión preventiva que aun se impone a los Sres. Nizami, Molla, Kamaruzzaman, Mujahid, Sayedee y Chowdhury es arbitraria y viola las garantías mínimas inherentes al derecho a un juicio imparcial y al acceso a la justicia.

Respuesta del Gobierno

34. El 12 de septiembre de 2011 el Grupo de Trabajo transmitió una comunicación al Gobierno, pero lamentablemente este no le proporcionó la información solicitada. El Grupo de Trabajo habría acogido con agrado la cooperación del Gobierno.

35. De conformidad con sus métodos de trabajo revisados, a la luz de la información recibida el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso. En la comunicación dirigida al Gobierno el 12 de septiembre de 2011 el Grupo de Trabajo declaró lo siguiente: "Si al expirar el plazo establecido no se ha recibido respuesta, el Grupo de Trabajo podrá emitir una opinión sobre la base de la información que haya recopilado". Desde su creación el Grupo de Trabajo siempre ha aplicado una presunción favorable a las denuncias que no han sido respondidas por el Gobierno.

Deliberaciones

36. El Grupo de Trabajo hace referencia a las declaraciones formuladas por el Gobierno de Bangladesh durante su examen periódico universal, que tuvo lugar en 2009, a saber:

"Uno de los principales objetivos del Gobierno en la esfera de los derechos humanos era llevar ante la justicia a todos los que habían cometido los crímenes más brutales de lesa humanidad durante la guerra de liberación nacional. La Primera Ministra, Sheikh Hasina, ya había indicado que Bangladesh pediría el apoyo de las Naciones Unidas para lograr que los mecanismos adoptados para los juicios previstos de los autores de esos actos cumplieren con las normas internacionales y salvaguardasen los principios básicos de la justicia. El Parlamento había aprobado una resolución unánime para que se enjuiciara a los

autores de esos actos y se diera reparación a las víctimas. Bangladesh estaba firmemente decidido a revertir la cultura de impunidad que había afectado a otras áreas de su vida nacional. El Gobierno tenía la intención de restablecer la observancia de las debidas garantías procesales, suprimir las modalidades y objetivos extrajudiciales y promover la armonía y la reconciliación políticas"(A/HRC/11/18, párr. 15).

37. En el mismo documento el Gobierno de Bangladesh declaró lo siguiente:

"La Ministra ... [informó] de que Bangladesh estaba haciendo los trámites necesarios para iniciar los juicios contra los criminales de guerra que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra de liberación de 1971" (A/HRC/11/18, párr. 87).

38. La prisión preventiva de las seis personas en cuestión plantea un problema de cumplimiento de las normas por el Tribunal de Delitos Internacionales establecido con arreglo a la legislación nacional de Bangladesh. Sin abordar la relación existente entre las disposiciones de la Ley de delitos internacionales (tribunales) y los recursos y garantías establecidos en la Constitución de Bangladesh, el Grupo de Trabajo señala que en sus procedimientos ese Tribunal debe cumplir las obligaciones pertinentes contraídas por Bangladesh en el marco del derecho internacional. Bangladesh ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que constituye un modelo para resolver muchos problemas de esa índole en la legislación nacional; además, es posible encontrar más referencias en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y otros tribunales *ad hoc*.

39. El Grupo de Trabajo reitera que con arreglo al derecho internacional la detención antes de la condena debe ser la excepción y no la regla. Este razonamiento se deriva del principio de presunción de inocencia. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que incluso cuando la privación de libertad sea inicialmente legítima y justificada, si su duración es indefinida se incumplirán las garantías establecidas en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos, en el contexto de la utilización legítima de la prisión preventiva o la provisional, afirmó que la historia de la redacción del artículo 9, párrafo 1, del Pacto confirma que no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a la ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad (comunicación N° 305/1988, *Van Alphen c. los Países Bajos*, dictamen emitido el 23 de julio de 1990, párr. 5.8; comunicación N° 631/1995, *Spakmo c. Noruega*, dictamen emitido el 5 de noviembre de 1999, párr. 6.3; comunicación N° 458/1991, *Mukong c. el Camerún*, dictamen emitido el 21 de julio de 1994, párr. 9.8; y comunicación N° 560/1993, *A c. Australia*, dictamen emitido el 3 de abril de 1997, párr. 9.2).

40. El Gobierno no ha respondido a la comunicación del Grupo de Trabajo ni refutado las opiniones expresadas por la fuente en relación con las presuntas violaciones de los derechos de los imputados durante la prisión preventiva.

41. Con estos antecedentes, y sobre la base de la información disponible, el Grupo de Trabajo considera que han tenido lugar importantes restricciones del acceso de los imputados a asistencia letrada. En particular, los abogados defensores no han podido asistir a las sesiones de interrogatorio de los imputados. Tampoco han tenido acceso irrestricto a las pruebas. El Grupo de Trabajo considera que el acceso de los imputados y sus abogados a la información se ha restringido en tal grado que les ha impedido impugnar su prisión preventiva, lo que contradice el artículo 9, párrafos 2 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios generales del derecho.

42. Después de más de un año en prisión preventiva en virtud de una orden del Tribunal de Delitos Internacionales, aun no se ha informado oficialmente a los imputados de la acusación formulada en su contra, lo que viola el artículo 9, párrafos 2 y 3, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Gobierno no ha refutado las alegaciones sobre su prolongado incumplimiento. Por otra parte, tampoco ha proporcionado información alguna que justifique la denegación de la puesta en libertad bajo fianza de las personas mencionadas, en particular, teniendo en cuenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para el ejercicio de ese derecho. El Grupo de Trabajo considera que el sometimiento de personas a prisión preventiva sin una explicación argumentada y adecuada es una medida innecesaria y desproporcionada en relación con el objetivo que se persigue.

Decisión

43. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Motiur Rahman Nizami, Abdul Quader Molla, Mohammad Kamaruzzaman, Ali Hasan Mohammed Mujahid, Allama Delewar Hossain Sayedee y Salhuddin Quader Chowdhury es arbitraria y violatoria del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría III aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

44. Sobre la base de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Motiur Rahman Nizami, Abdul Quader Molla, Mohammad Kamaruzzaman, Ali Hasan Mohammed Mujahid, Allama Delewar Hossain Sayedee y Salhuddin Quader Chowdhury, a fin de ajustarla a las reglas y normas establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[Aprobada el 23 de noviembre de 2011.]
